

por invadirse en este, facultades del Congreso de la Union.

Segundo: hágase saber; publíquese esta sentencia en el Diario Oficial del Estado; sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial, y remítanse los autos en revision á la Suprema Corte de Justicia.

El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fé.—Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez*, secretario.

Es copia que certifico. Zacatecas, 19 de Agosto de 1874.—*Luis G. Chavez*, secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, 19 de Setiembre de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst, en representacion de D. Oscar Lorentzen, contra el Administrador principal de rentas de la Capital del Estado, que le exige el pago del uno por ciento sobre el numerario colocado para su exportacion en el puerto de Matamoros, y contra la disposicion del decreto número 92 de la Legislatura del Estado, por invasion de la esfera de la autoridad federal. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion general, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito, que concede amparo al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos, los CC. Presidente y Magistrados

que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 19 de Noviembre de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Tlaxcala por el C. Lic. Antonio Ramirez, en favor de su defenso Justino Aguilar, contra la pena de muerte que le impuso el C. Gefe político suplente, del Distrito de Calpulalpan.*

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que para poder emitir con mas acierto su parecer, necesita de que se le proporcione la causa formada por el C. Prefecto suplente de Calpulalpan, á Justino Aguilar; y como la ley de 20 de Enero de 1869, en su artículo 12 manda, que todo funcionario tiene la obligacion de proporcionar con la oportunidad necesaria, al Promotor fiscal, &c. las constancias que pidiere, á V. suplico, se sirva proporcionármela á la mayor brevedad, por ser el término que tengo para emitir mi parecer, muy corto.

Tlaxcala, 28 de Abril de 1874.—*Lic. José Cirilo Alva.*

*Otro pedimento del C. Promotor fiscal*

En 30 del mismo, compareció el Promotor á horas que son las cuatro de la tarde, y dijo: que no habiendo entregado hasta este momento el H. Congreso del Estado la causa que se le pidió, para que el suscrito pudiera emitir su parecer, puesto que uno de los fundamentos del quejoso para solicitar el amparo, es, que no está probado el delito, y para ver si en efecto está ó no, era preciso leer la causa; pero como esto no ha sido posible, y ya se le está concluyendo el término del traslado, por lo expuesto pide: que se abra á prueba el presente negocio, y en el alegato fundará su pedimento.

Esto expuso y firmó. Doy fé.—*Lic. José Cirilo Alva.—Paredes.*

*Tercer pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que el C. Lic. Antonio M. Ramirez, defensor de Justino Aguilar, declarado reo de plagios y asaltos, ha solicitado, que la Justicia federal ampare y proteja á su defendido contra la sentencia de muerte dictada por el C. Cristobal Farfan, Prefecto político, suplente del Distrito de Calpulalpan de Ocampo, por creer que en la persona de su defendido se han violado las garantías que la Constitución general de la República, en sus artículos 13 y 19, otorgan á todo ciudadano, y funda su solicitud en que ha sido juzgado por un Tribunal especial, y en que aun cuando esto no fuere así, no se le ha probado el delito ó delitos.

Los crímenes de plagio y asalto, son tan atroces, que con razon el legislador ha dado una ley tan fuerte, es decir, una ley por la que se prohíben ó suspenden las mas preciosas garantías que tiene cualquier criminal, por grave que sea su delito; mas ¿por qué ha hecho esto el legislador? porque desgraciadamente en nuestra cara patria, se

cometen frecuentemente estos crímenes de plagio y asalto, por los cuales se ha perdido la seguridad en los caminos, están expuestas las vidas de las personas y sus intereses, esto es, está la Sociedad en grande alarma, pues no puede estar tranquila cuando se vé amagada de esta plaga de bandidos; y por lo tanto, nuestros sabios legisladores han fulminado desde hace algunos años una ley *ad-terrorem*; y sin embargo, vemos que si-guen cometién dose estos crímenes, por cuyo motivo, á todo reo de estos delitos debe aplicársele con rigor esta ley; pero felizmente, al caso que nos ocupa no es aplicable, porque en primer lugar, como dice, muy bien el defensor de Aguilar, esto ha sido juzgado por un Tribunal especial.

La ley de 2 de Mayo de 1873 sobre plagarios, estableció las autoridades que debían conocer en esta clase de delitos, y entre ellos se encuentran los Prefectos políticos como autoridades políticas, y no concede esta ley á dichas autoridades la facultad de delegar su jurisdicción; pues si así lo hubiere hecho, habria obrado contra la ley 18 tít. 4º part. 3º que está vigente y ordena: *que no puede delegarse el conocimiento de las causas criminales en que puede recaer sentencia de muerte*; y en el caso presente, si se hubiera probado el delito, *recaeria sentencia de muerte*, y por tanto, el Prefecto propietario á quien está cometida por la ley la facultad de conocer en los delitos de plagio y asalto, no pudo por ningún motivo delegar el conocimiento de la causa de Aguilar al Prefecto suplente, y en tal virtud ha sido juzgado Aguilar por un Tribunal especial.

Ademas, la ley del Estado de 12 de Junio de 1867, que organizó ó reglamentó el gobierno interior de los Distritos, al crear á los Prefectos no les concedió la facultad de poder excusarse y de ser recusables, como lo han hecho otras leyes especiales del Estado con los funcionarios del poder judicial; y no teniendo esta facultad el Prefecto suplente, solo debia haber entrado al conocimiento de la causa faltando el propietario,

pues para este único caso es para el que han sido creados; ahora bien, si el C. José María Inclan no quiso conocer de la causa ¿por qué no pidió licencia con cualesquiera pretexto, y entonces si hubiera conocido legalmente el C. Farfan como suplente y no como en el caso que nos ocupa, en que tanto el propietario como el suplente, trabajaban á un mismo tiempo y en una misma Oficina? es decir, había dos Prefectos segun lo ha probado el defensor con la informacion de testigos rendida ante el C. Juez de 1ª Instancia del Distrito de Calpulalpam, y tambien con el certificado de esta misma autoridad; y esa existencia de dos Prefectos políticos en un mismo Distrito, es contraria á la ley antes citada de 12 de Junio de 1867 que en su artículo 1º dice: *En cada uno de los Distritos del Estado, habrá un Prefecto nombrado &c.* luego si esta ley manda que haya un solo prefecto en cada Distrito, claro es que la existencia de dos á un mismo tiempo, es contra la ley; y siendo así, la jurisdicción del suplente estando funcionando el Propietario, es nula, y siendo nula es un Tribunal especial, ó mejor dicho, un simple particular que se abrogó facultades que ninguna ley le concede; el por qué se abrogó estas facultades, no me toca ni al Juzgado de Distrito investigarlo, pues mi mision en este caso es ver solamente si hubo ó no violacion de garantías, las que evidentemente se han violado en la persona de Aguilar, por haber sido juzgado por un Tribunal especialísimo.

Por lo que respecta al segundo punto ó fundamento en que se apoya el defensor, al interponer el recurso de amparo, en mi humilde concepto, tambien es cierto, pues como dice y ha patentizado muy bien y profusamente el C. Lic. Ramirez en su defensa, no están probados los delitos de plagios y asaltos, porque de las declaraciones todas que obran en la causa, no se saca ó deduce otra cosa, sino que D. Gumesindo Bazan fué asesinado; que D. Manuel Mayora y D. Ignacio Martinez fueron plagiados; que

las fincas de San Nicolás, Mazapa, Tlazala, Jajuey quebrado y otras, fueron asaltadas; pero de ninguna manera que Justino Aguilar fuese autor de tales delitos, pues este ha probado perfectamente la coartada, con el testimonio de los CC. Jesus Vital, Vicente Huesca, Aniceto Coronel, Rafael Santoyo, José de la Luz Vargas, Manuel Monterubio y Trinidad Bermudez. cuyas declaraciones obran á fojas de la 117 vuelta á la foja 122 tambien vuelta de la causa, y es absolutamente imposible, que estando Justino Aguilar en Calpulalpam á las siete y media de la noche del día 14 de Enero de 1870, pudiese estar á cuatro leguas de distancia, á las ocho de la misma noche, hora en que se perpetró el crimen de plagio y asesinato de Bazan.

De los demas delitos que se le imputan tampoco hay pruebas, pues unos testigos, mas que testigos son acusadores; otros, parientes de estos; otros son testigos de oídas; otros que aunque se dicen presenciales, por sus contradicciones se ve que no dicen la verdad.

Lo único que hay contra Justino Aguilar, es la fama pública; pero esta está nacida del asesinato de Bazan y de haberso unido á las fuerzas pronunciadas; ademas, presunciones vehementes; mas por estas pruebas semiplenas no puede condenarse al reo; pero mucho menos imponérsele la pena de muerte, porque para aplicar esta, es necesario tener una evidencia de que está plenamente probado el delito, y que esta prueba sea tan clara y terminante como la luz del mediodía, que no deje la menor duda, y en el caso presente, hay gran duda de que Justino Aguilar sea el autor de tales delitos: y habiendo esta duda pudo, por los axiomas de que el que todo lo niega todo lo confiesa, y el de que nada debe nada teme, imponérsele la pena de muerte? de ninguna manera. Luego no habiéndoselo probado plenamente que sea plagiario y saltador, no estaban para él suspensas las garantías que otorgan los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Consti-

tucion federal, y no estándolo, claro es que no debió ser sentenciado como plagiaro y saltador por la Prefectura de Calpulalpam.

De lo expuesto se deduce, que tanto por haber sido juzgado por el Prefecto político suplente, estando funcionando al mismo tiempo el propietario, como por habérselo condenado, sin estar probados los delitos que se le imputan, se han violado en su persona las garantías que conceden los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Constitución general de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, el suscrito concluye pidiendo, que se sirva V. fallar: que la Justicia federal ampara y protege á Justino Aguilar, contra la sentencia dictada por el Prefecto político suplente de Calpulalpam de Ocampo, por la que se le condena á sufrir la pena de muerte como plagiaro y saltador.

Tlaxcala, 17 de Mayo de 1874.—  
*José Cirilo Alva.*

Es copia que certifico. Tlaxcala, 28 de Mayo de 1874.—*J. Mariano Paredes,* secretario.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Tlaxcala, Mayo 27 de 1874.—Visto el ocurso de amparo presentado por el C. Lic. Antonio Ramírez, defensor de Justino Aguilar, contra la sentencia que el C. Cristobal Farfán pronunció, como Prefecto suplente del Distrito de Calpulalpam, en 28 de Abril último, juzgando á Aguilar por los delitos de plagio y asesinato, perpetrados en la persona de D. Gumesindo Bazán, y condenándole á la pena de muerte, alegando el promovente, que por no haberse probado los delitos de que se ha acusado á su defenso, se ha violado la garantía que otorga el art. 18 de la Constitución y la que reconoce el 16 del mismo Código, por no ser el C. Farfán autoridad competente, en virtud de haber conocido de la causa por escusa del C. Prefecto propietario. Visto el informe con

TOMO VI.—PARTE II.

justificacion rendido por la autoridad designada como ejecutora del acto reclamado; la causa criminal seguida á Aguilar que remitió el H. Congreso del Estado á solicitud del C. Promotor; lo pedido por este; lo alegado por parte del quejoso, y lo demás que ver convino.

Considerando: que está plenamente justificado que el C. José María Inclán, Prefecto propietario de Calpulalpam, ha desempeñado los negocios administrativos concernientes á su empleo, en los dias trascurridos del 10 al 23 del próximo pasado Abril, y que en esos mismos el C. Cristobal Farfán ha juzgado á Aguilar con el carácter de Prefecto suplente, por haberse escusado el propietario.

Considerando: que las autoridades políticas de los Distritos de los Estados, deben normar sus procedimientos en los juicios por asalto y plagio, á la ley que suspendiendo algunas garantías individuales, los revisó con el carácter de jueces especiales.

Que segun esa ley, (de 2 de Mayo de 1873. art. 39) el juicio no puede exceder en ningún caso del plazo improrrogable de quince dias, no pudiendo admitirse mas recursos que el de indulto; y si se admitieran otros, ó las autoridades políticas fueran recusables ó pudieran escusarse, habria tal vez necesidad de aplazar el término señalado para pronunciar sentencia, lo cual es sin duda, contrario á la letra y espíritu de dicha ley.

Que no siendo conforme á la ley, el procedimiento de una autoridad política que se escusa para no conocer de los delitos comprendidos en la ley de 2 de Mayo, sino antes bien, contrario á ella, la causa porque ha procedido el C. Farfán no es fundada ni motivada como él mismo lo asienta en su informe justificado, y por consiguiente, no ha obrado conforme al art. 16 de la Constitución, que previene, que nadie sea molestado en su persona, sino por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, de cuyo testo se infiere, que las autoridades no tienen mas

facultades que las que les conceden las leyes, siendo solamente los particulares quienes pueden hacer lo que ellas no les prohiban.

Considerando: que segun la legislacion del Estado de Tlaxcala, los suplentes de las Prefecturas á quienes debe nombrar el Poder Ejecutivo para que ejerzan las funciones que en las de los demás Estados de la República están encomendadas á los presidentes de los Ayuntamientos de las cabeceras de Distrito, Partido ó Canton, no han sido establecidos para los casos de escusa ó recusacion en determinado negocio, sino para cubrir las faltas temporales de los Prefectos, (art. 32 ley de 7 de Julio de 1869) disposicion que además de ser de una ley orgánica del Estado, es muy conforme con la letra y espíritu de su Constitucion particular, (art. 55) así como con los principios comunes de derecho administrativo, aunque diferente de los que arreglan la organizacion de los tribunales comunes.

Que no estando establecidos los suplentes de los Prefectos para los casos de escusa, es evidente que aunque el C. Farfán haya sido nombrado con anterioridad al acto reclamado, no puede considerarse sino como autoridad delegada que ha ejercido funciones de la competencia del Prefecto propietario de Calpulalpam, puesto que este no se ha separado de su encargo; y las funciones que concede la ley, no se delegan, por que nadie en la República puede ser juzgado ni sentenciado sino por el Tribunal que previamente haya establecido la ley, art. 14 de la Constitucion, cuya garantía no ha sido suspensa por la de 2 de Mayo citada.

Considerando por último: que no habiendo sido juzgado Aguilar por autoridad competente, no hay para que ontrar en el examen de si está ó no probado el delito por el que ha sido condenado.

Con fundamento de los arts. 14 y 16 de la Constitucion federal y de la ley de 20 de Enero de 1869, debia de fallar y fallo: que la Justicia de la Union ampara y pro-

toge á Justino Aguilar, contra la sentencia de muerte que pronunció en 23 del próximo pasado Abril el C. Cristobal Farfán, como Prefecto suplente del Distrito de Calpulalpam por escusa del propietario, C. José María Inclan.

Hágase saber; publíquese por los periódicos, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para su revision.

Así definitivamente juzgando, lo decretó el C. Lic. Felipe López Romano, Juez de Distrito del Estado, y firmó. Doy fé.—*F. López Romano.—José Mariano Paredes.*

Es copia que certifico. Tlaxcala, Mayo 28 de 1874.—*José Mariano Paredes.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Setiembre 2 de 1874.—Visto el amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Tlaxcala por el C. Lic. Antonio Ramirez, en favor de su defenso Justino Aguilar, contra la pena de muerte que le impuso el C. Gefo político suplente del Distrito de Calpulalpam, en la causa que se le formó por el plagio y homicidio de D. Gumesindo Bazán. Visto el informe que rindió la autoridad responsable de este acto, en que manifestó, que estando consignado el quejoso á disposicion del C. Prefecto nato de Calpulalpam, C. José María Inclan, para que siguiera la causa contra Aguilar, despues de su aprehension, y habiendo pronunciado este Sr. un auto escusándose del conocimiento de esta causa por motivo de haber tenido disgustos graves con la familia del reo, que lo hicieron aparecer imparcial, pasó la causa á su conocimiento por ministerio de la ley, como Prefecto suplente del mismo Distrito, por cuya causa no cree que haya sido incompetente, y en consecuencia, no ha infringido la garantía del art. 16 que el quejoso

alega. Visto el pedimento del C. Promotor, fundado en la causa que original solicitó y obra en el expediente; la sentencia del inferior otorgando el amparo, y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: que ha estado espedito el C. Cristobal Farfán, como Prefecto Suplente, para juzgar de la causa en que se escusó legalmente el Prefecto nato, sin considerarse por esto como Juez especial.

Considerando: que según las circunstancias que obran en la causa, resulta que no es cierto que al acusado no se le probara el delito por el que ha sido juzgado, como se refiere en el recurso de amparo, y que en consecuencia, no aparece que con el procedimiento se haya violado alguna garantía de las que no están suspensas por la ley general de saltadores y plagiarios.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución y ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia que pronunció el C. Juez de Distrito de Tlaxcala amparando al quejoso, y se declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á Justino Aguilar, contra los actos de que se queja.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Miguel Auza.*—*Luis Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre de 1874.—*E. Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por el C. Juan Rodríguez á favor de sus hermanos Luz, Salvador y Leonides del mismo apellido, contra los procedimientos del Gefe político de Dolores Hidalgo, que con violación de garantías, los redujo á prisión.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Gefe de Hacienda en ejercicio de la promotoría fiscal, dice: En el recurso de amparo promovido por el C. Juan Rodríguez á nombre de sus hermanos Leonides y Salvador del mismo apellido, contra los procedimientos del Gefe político de Dolores Hidalgo, el Juzgado de su digno cargo pidió el informe con justificación á la autoridad política del citado partido de Hidalgo, y aunque lo rindió en el término de la ley, no fué con los requisitos que se le previno. No obstante de dicho informe, que si bien fué cierto que Salvador y Luz Rodríguez fueron aprehendidos por sospechas de complicidad en un asalto dado al rancho de la Graya la noche del 23 de Noviembre de 1873, también lo es, que se les puso en libertad tan luego como se sinceraron de la responsabilidad que se les atribuía, por lo que al respecto de estos individuos, ya no hay mérito para el amparo, supuesto que no hay sobre que recaiga, por lo que el que suscribe escusa alegar, á reserva de que conste de autos la soltura de Luz y Salvador Rodríguez.

Por lo que respecta á Leonides, también Rodríguez, ya el Ministerio fiscal en 13 de Diciembre del año próximo pasado, manifestó: que de las constancias que obran en las actuaciones, no era posible determinar si se habían violado las garantías individuales que invocó el quejoso, y que hoy solo podrían aducirse en favor de Leonides; mas